



# Asamblea General

Sexagésimo sexto período de sesiones

Documentos Oficiales

Distr. general  
13 de marzo de 2012  
Español  
Original: inglés

---

## Sexta Comisión

### Acta resumida de la 21ª sesión

Celebrada en la Sede, Nueva York, el jueves 27 de octubre de 2011, a las 10.00 horas

*Presidente:* Sr. Salinas Burgos ..... (Chile)

## Sumario

Tema 81 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 63º período de sesiones (*continuación*)

---

La presente acta está sujeta a correcciones. Dichas correcciones deberán enviarse, con la firma de un miembro de la delegación interesada y *dentro del plazo de una semana a contar de la fecha de publicación*, al Jefe de la Sección de Edición de Documentos Oficiales, oficina DC2-750, 2 United Nations Plaza, e incorporarse en un ejemplar del acta.

Las correcciones se publicarán después de la clausura del período de sesiones, en un documento separado para cada Comisión.

11-56669 (S)



Se ruega reciclar

*Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.*

**Tema 81 del programa: Informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 63º período de sesiones (continuación)**  
(A/66/10 y Add.1<sup>1</sup>)

1. **El Sr. Pellet** (Relator Especial sobre las reservas a los tratados), en respuesta a las observaciones formuladas durante el debate anterior sobre el tema, dice que en la práctica habría sido difícil para la Comisión de Derecho Internacional concluir su labor sobre el tema de las reservas a los tratados y ultimar la Guía de la Práctica sobre las Reservas a los Tratados en menos de los 17 años que hubo de dedicarle, habida cuenta del carácter puramente técnico y la complejidad del tema. El hecho de haber finalizado esta labor constituye de por sí un logro importante, atribuible en no poca medida al empeño de los miembros de la Comisión en revisar las directrices y los comentarios que conforman la Guía de la Práctica y a la dirección particularmente hábil ejercida por el Presidente del Grupo de Trabajo sobre las reservas a los tratados. El texto íntegro de la Guía de la Práctica, de unas 800 páginas, se pondrá a disposición de la Sexta Comisión en diciembre con vistas a su examen en 2012, ocasión propicia para responder a las observaciones sustantivas ya formuladas sobre el texto de las directrices que conforman la Guía de la Práctica aprobada por la Comisión en su 63º período de sesiones y reproducida en el párrafo 75 de su informe (A/66/10 y Add.1).

2. Una vez publicados los comentarios, que están estrechamente vinculados a las directrices, quedará demostrada la inexactitud de algunas de esas observaciones sustantivas, en particular la afirmación de que la directriz 1.1.3 (Reservas relativas a la aplicación territorial del tratado) se aparta del espíritu del artículo 29 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados; que la directriz 2.3.1 (Aceptación de la formulación tardía de una reserva) no ha sido corroborada por la práctica existente; y que la directriz 4.5.3 (Condición del autor de una reserva inválida con respecto al tratado) mantiene la presunción positiva de validez de las reservas. La Guía de la Práctica tiene por objeto presentar, como un todo coherente, la visión actual de los Estados y los expertos sobre el tema. Contrariamente a la opinión expresada por una pequeña minoría de las delegaciones, la Guía

no habría podido cumplir su propósito si se hubiese limitado a reiterar el contenido de los artículos 19 a 23 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Por ello, la Comisión ha intentado proporcionar respuestas amplias mediante el análisis de la práctica, la doctrina y la lógica plasmada en la Convención. La Comisión espera que la Guía de la Práctica esclarezca y facilite la práctica futura en materia de reservas a los tratados, estableciendo para ello cierto orden más allá del establecido por la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

3. La primera de las dos recomendaciones aprobadas por la Comisión en 2011 ha tenido en general una buena acogida. En dicha recomendación, incluida en las conclusiones acerca del diálogo sobre las reservas que figuran como anexo de la Guía de la Práctica, se señala que la Asamblea General debería instar a los Estados y las organizaciones internacionales, así como a los órganos de vigilancia, a entablar y mantener ese diálogo sobre las reservas de manera pragmática y transparente. Sería útil adjuntar esas conclusiones a la resolución que la Asamblea General apruebe a ese respecto. En cuanto a la segunda recomendación, sobre los mecanismos de asistencia en materia de reservas a los tratados, que figura en el párrafo 73 del informe de la Comisión, la respuesta ha sido más mesurada. Algunas delegaciones han rechazado de plano la idea de un mecanismo de asistencia en materia de reservas, mientras que otras le han dado su respaldo en el entendimiento de que será objeto de ajustes ulteriores. La idea se podría examinar en forma más exhaustiva en 2012, pero bajo ninguna circunstancia el mecanismo propuesto pretende ser de carácter obligatorio. Su propósito tampoco es reproducir mecanismos similares ya existentes en el marco de la Unión Europea o el Consejo de Europa; la búsqueda de una nueva solución obedece precisamente al hecho de que los marcos difieren entre sí. Si bien la formulación de reservas a los tratados o de objeciones a las reservas no es patrimonio exclusivo de países ricos con amplios recursos jurídicos a su disposición, a menudo los países en desarrollo carecen de los medios necesarios para resolver las cuestiones técnicas relacionadas con las reservas. El objetivo del mecanismo propuesto es ayudar a los países en desarrollo en esa tarea, y la recomendación no es más que un esbozo que deberá examinarse más detenidamente.

4. En cuanto a los métodos de trabajo de la Comisión de Derecho Internacional y su relación con la

<sup>1</sup> Pendiente de publicación.

Sexta Comisión, el Relator Especial dice que sus 22 años de servicio en la Comisión de Derecho Internacional lo facultan para observar con franqueza que el diálogo genuino en cuya necesidad imperiosa insisten reiteradamente los miembros de la Sexta Comisión no podrá tener lugar mientras siga imperando el *statu quo*. La presencia de miembros de la Comisión de Derecho Internacional en las reuniones de los asesores jurídicos de la Sexta Comisión es apenas tolerada y el diálogo interactivo se reduce a su mínima expresión, incluso en relación con el informe que actualmente se examina. La cruda verdad es que la Sexta Comisión tiene poco interés en la Comisión de Derecho Internacional, que constituye un legado cuidadosamente preservado que no ha sufrido ningún cambio verdaderamente profundo desde su creación en 1948. La Sexta Comisión ha criticado con frecuencia las sugerencias de temas hechas por la Comisión de Derecho Internacional, a veces con razón, pero es deber de los Estados responder con sugerencias positivas. Aunque la Comisión de Derecho Internacional ha manifestado su plena disposición a recibir sugerencias positivas de la Sexta Comisión, incluso directrices concretas, no ha recibido ni unas ni otras en muchos años.

5. Otra queja a menudo escuchada es que la Comisión de Derecho Internacional ya no produce otra cosa que derecho no vinculante. Si ello fuera cierto, la Comisión no estaría cumpliendo su función. Resulta claro que, también en este caso, es responsabilidad de los Estados y la Asamblea General decidir si convierten o no en normas jurídicas obligatorias los proyectos de artículos elaborados por la Comisión. Como se indica en su informe, la Comisión continúa esforzándose por reformar sus métodos de trabajo, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las propuestas generalmente razonables de su Grupo de Trabajo sobre los métodos de trabajo. La Sexta Comisión tal vez deba seguir ese ejemplo y constituir su propio grupo de trabajo a tal fin.

6. En cuanto a las críticas relativas a la calidad de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional, sería más justo que estuviesen dirigidas a los Estados que presentan candidatos y a la Asamblea General, a la que incumbe la responsabilidad de elegirlos. El Relator Especial subraya la importancia crucial de la independencia de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional y cita el siguiente extracto de una resolución sobre la condición de juez

internacional aprobada por el Instituto de Derecho Internacional en septiembre de 2011, que se aplica por igual a la selección de los miembros de la Comisión: “La selección de los jueces debe llevarse a cabo teniendo en cuenta, ante todo, las calificaciones de los candidatos, de las cuales las autoridades políticas deben estar plenamente informadas. Se debe subrayar, en particular, que la elección de los jueces no debe ser objeto de negociaciones previas por medio de las cuales la votación en esas elecciones se subordine a la votación en otras elecciones”.

7. **El Sr. Gaja** (Relator Especial sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales) agradece la actitud benevolente mostrada por algunas delegaciones hacia el proyecto de artículos sobre la responsabilidad de las organizaciones internacionales y señala que con ello no pretende expresar desagrado ante las observaciones críticas, que siempre han ayudado a promover mejoras y, sin duda, seguirán haciéndolo. El Relator Especial suscribe plenamente el contenido del comentario general introductorio, que ha sido objeto de tantos elogios y en el que se explica el propósito y el carácter general del proyecto de artículos, que es el primer intento de establecer un marco jurídico amplio sobre la responsabilidad internacional de las organizaciones internacionales para con la comunidad de naciones. Como ha señalado la propia Secretaria General Adjunta de Asuntos Jurídicos y Asesora Jurídica de las Naciones Unidas, esa esfera del derecho puede tener repercusiones importantes para las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales, tanto en la actualidad como en años venideros.

8. A falta de otros textos, no es de extrañar que la práctica contemporánea, que incluye decisiones judiciales tanto internacionales como nacionales, haya sustanciado desde un principio el proyecto de artículos. La Comisión de Derecho Internacional siempre ha tenido en cuenta la gran diversidad de organizaciones internacionales existentes, razón por la cual varios proyectos de artículo contienen solamente normas generales que, como también ha reconocido sistemáticamente la Comisión, pueden verse complementadas o sustituidas por normas especiales, en particular en lo que respecta a las relaciones entre una organización internacional y sus miembros. No obstante, hasta la fecha no se ha hecho ningún intento de identificar esas normas especiales, ni se ha encontrado ninguna norma que pueda aplicarse a categorías particulares de organizaciones internacionales. Solo el

comentario del proyecto de artículo 64 contiene un posible ejemplo de norma especial, a saber, la atribución a la Unión Europea de la conducta de sus Estados miembros cuando estos ejecutan actos jurídicos vinculantes de la Unión. Las organizaciones internacionales, de hecho, han proporcionado muy pocos ejemplos de esas normas especiales en las que han hecho tanto hincapié en sus observaciones sobre el proyecto de artículos.

9. Otro argumento que se aduce con frecuencia es que algunos de los proyectos de artículo tienen poca o ninguna pertinencia para la mayoría de las organizaciones internacionales; por ejemplo, los proyectos de artículo sobre legítima defensa, contramedidas y elusión por una organización internacional de obligaciones internacionales mediante decisiones y autorizaciones dirigidas a sus miembros, cuya inclusión ha obedecido en todos los casos, entre otras razones, al propósito de prever el eventual surgimiento de determinados problemas para algunas organizaciones en circunstancias particulares. De no haberse incluido esos proyectos de artículo, las circunstancias que excluyen la ilicitud, aunque tal vez no sean pertinentes para la mayoría de las organizaciones internacionales, no podrían ser invocadas. Su inclusión, sin embargo, en nada afecta a las organizaciones para las que no son pertinentes.

10. En su labor relativa al proyecto de artículos, la Comisión de Derecho Internacional se ha esforzado en reunir y analizar ejemplos de todas las prácticas disponibles y ha examinado también las observaciones orales y escritas formuladas por los miembros de la Sexta Comisión. Durante el presente año se han examinado igualmente todas las observaciones sobre el proyecto de artículos aprobado en primera lectura, tanto las formuladas por la Sexta Comisión como las presentadas por escrito por los Estados antes y después del plazo establecido en la resolución pertinente de la Asamblea General. Es de lamentar, sin embargo, que los Estados no hayan aprovechado mejor la oportunidad de presentar observaciones por escrito en aras de seguir mejorando el proyecto de artículos. Se han examinado asimismo las observaciones de varias organizaciones internacionales y se celebró una reunión con la Asesora Jurídica de las Naciones Unidas y los asesores jurídicos de los organismos especializados. Entre las modificaciones realizadas como resultado de esas aportaciones figura una enmienda relativa a los comportamientos *ultra vires*

contemplados en el proyecto de artículo 8, en virtud de la cual en dicho artículo actualmente se dispone que el comportamiento de un órgano o agente solo es atribuible a la organización pertinente si “tal órgano o agente actúa a título oficial en el marco de las funciones generales de la organización”. Una de las propuestas que no ha sido aceptada es la insistencia en el principio de que las organizaciones internacionales no deberían estar obligadas a reparar íntegramente el perjuicio causado ya que eso podría dar lugar a “un riesgo excesivo”, que la Comisión de Derecho Internacional ha rechazado por considerar que ello colocaría a las organizaciones internacionales, de manera injustificada, en una posición más favorable que la de los Estados.

11. A pesar de la utilidad de esos intercambios y del deseo de algunas organizaciones internacionales, el texto del proyecto de artículos no es negociable. No obstante, tal vez algún día se den las circunstancias adecuadas para la negociación si la Asamblea General adoptara una decisión sobre la posible aprobación de una convención basada en el proyecto de artículos, lo que probablemente no ocurra hasta que se decida la suerte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos. Entretanto, el procedimiento más adecuado sería que la Asamblea General aprobase una resolución en que se tomara nota del proyecto de artículos y en cuyo anexo se reprodujera el texto de dicho proyecto.

12. **El Sr. Kamto** (Presidente de la Comisión de Derecho Internacional), al presentar los capítulos VI, VIII y IX del informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 63° período de sesiones (A/66/10 y Add.1), dice que en 2011 la Comisión finalizó su segunda lectura del proyecto de artículos sobre el tema “Efectos de los conflictos armados en los tratados” (capítulo VI). Tras la aprobación de ese proyecto de artículos y de los comentarios al respecto, la Comisión decidió, de conformidad con su estatuto, recomendar a la Asamblea General que tomara nota del proyecto de artículos en una resolución y lo incluyera en un anexo de esta, y que considerara la posibilidad, en una fase ulterior, de elaborar una convención sobre la base del proyecto de artículos.

13. El Presidente de la Comisión de Derecho Internacional presentará una visión panorámica del tema que se centrará en los cambios sustanciales introducidos durante la segunda lectura en la versión

aprobada en primera lectura en 2008, que se divide en tres partes, la primera de las cuales, titulada “Ámbito de aplicación y definiciones”, comprende los proyectos de artículo 1 y 2. El único cambio sustancial realizado en relación con el ámbito de aplicación del proyecto de artículos, según lo establecido en el proyecto de artículo 1, consistió en incluir las palabras “las relaciones entre Estados en virtud de un tratado”, basadas en una formulación similar de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969. Con la nueva redacción se persigue subsanar el problema que planteaba la formulación en primera lectura, que, al confinar el alcance del proyecto de artículos sobre a los tratados celebrados entre Estados, parecía excluir los tratados multilaterales en que son partes otros sujetos de derecho internacional, como las organizaciones internacionales. Esta cuestión también se aclaró mediante la inclusión de texto adicional en la definición de “tratado”. La Comisión considera, además, que los únicos conflictos armados de carácter no internacional que están comprendidos en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos son aquellos que, por su naturaleza y alcance, pueden afectar a un tratado; de aplicarse un criterio diferente, podrían producirse efectos potencialmente destabilizadores en las relaciones convencionales, al darse a entender que todos los conflictos de esa índole pueden afectar a los tratados existentes. No obstante, la Comisión prefirió no hacer mención expresa del tema en el proyecto de artículo 1, en la medida en que el uso del término “prolongada” en la definición de conflicto armado que figura en el proyecto de artículo 2 supone una referencia implícita a la cuestión.

14. En cuanto a la definición de “tratado” enunciada en el proyecto de artículo 2, se modificó a fin de confirmar que los tratados entre Estados en los que son partes también organizaciones internacionales se inscriben en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos. El cambio más importante, sin embargo, está relacionado con la definición de conflicto armado. Sobre la base de las sugerencias formuladas por los gobiernos y planteadas en el plenario de la Comisión, la definición aprobada en primera lectura se sustituyó por una versión modificada de la definición utilizada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en su decisión en la causa *Tadić*. En concreto, no se reproduce la cláusula final de dicha definición, relativa al recurso a la fuerza armada entre grupos armados organizados dentro de un Estado, en la

medida en que esa situación no está contemplada en el proyecto de artículos.

15. La segunda parte del proyecto de artículos, titulada “Principios”, se divide en dos capítulos, el primero de los cuales trata de la aplicación de los tratados en caso de conflicto armado, mientras que el segundo contiene otras disposiciones relativas a la aplicación de los tratados. El capítulo I, que consta de los proyectos de artículo 3 a 7, es fundamental para la aplicación del proyecto de artículos en su conjunto. En el proyecto de artículo 3 se establece la orientación básica del proyecto de artículos, a saber, que el estallido de un conflicto armado no da lugar *ipso facto* a la terminación de los tratados ni a su suspensión. La continuidad o no de la aplicación de los tratados depende, por tanto, de las circunstancias de cada caso. Los proyectos de artículo 4 a 7 tienen como propósito ofrecer orientación a ese respecto. Durante la segunda lectura, la Comisión decidió reordenar esos proyectos de artículo a fin de establecer un orden de prioridad. En consecuencia, el primer paso consiste en examinar el propio tratado. De conformidad con el proyecto de artículo 4, de existir una disposición expresa en un tratado que regule su continuidad en el contexto de un conflicto armado, se aplicaría esa disposición. De no existir tal disposición, habría que recurrir, conforme a lo previsto en el proyecto de artículo 5, a las reglas establecidas en el derecho internacional sobre interpretación de los tratados para determinar la suerte que correría el tratado en caso de conflicto armado. Si la aplicación de esos dos proyectos de artículo no arroja ninguna respuesta concluyente, se habrán de tener en cuenta elementos ajenos al tratado, y el proyecto de artículo 6 recoge una serie de factores contextuales que pueden ser pertinentes para llegar a una conclusión al respecto. Por último, el lector también puede apoyarse en el proyecto de artículo 7, que se refiere a la lista indicativa incluida en el anexo en la que figuran los tratados que, en razón de su materia, continúan aplicándose, en todo o en parte, durante un conflicto armado.

16. En lo que respecta a la sustancia del proyecto de artículo 3, la Comisión decidió no reformular la disposición en términos afirmativos, como presunción de continuidad, ya que ello obligaría a intentar indicar las situaciones en que tal presunción no se aplicaría; en otras palabras, cuándo dejarían de aplicarse los tratados y en qué circunstancias. En líneas generales, la Comisión estima que tal reorientación no contribuiría a

la estabilidad de las relaciones convencionales y, en consecuencia, mantuvo la orientación adoptada en primera lectura. El proyecto de artículo 4, que se había presentado como proyecto de artículo 7 en el texto en primera lectura, se trasladó a su posición actual en el marco de la reorganización de los proyectos de artículo con el fin de establecer el orden de prioridad antes descrito.

17. El proyecto de artículo 5 contiene una nueva disposición, surgida del debate relativo a la inclusión, en el proyecto de artículo 4 del texto en primera lectura, de una referencia al criterio de la intención y a los artículos 31 y 32 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, cuestión que ha sido objeto de debate tanto en la Comisión de Derecho Internacional como en la Sexta Comisión. Se trata de un problema doble: en primer lugar, la incorporación de un elemento subjetivo a los criterios más objetivos enumerados en dicha disposición, y en segundo lugar, la cuestión de si es realista o no referirse a la intención de las partes respecto de los posibles efectos de un conflicto armado. Para resolver ese problema, la Comisión, en primer lugar, estableció una distinción entre la posibilidad de hallar una solución en el propio tratado (a través de su interpretación) y la de tener en cuenta factores externos al tratado, y presentó la primera de esas posibilidades como nuevo proyecto de artículo 5 y la segunda como proyecto de artículo 6. Con respecto al análisis interno del propio tratado, quedaba por decidir si la intención de las partes era una base suficiente. Para dar cabida a las opiniones divergentes que se habían formado a lo largo de los años, la Comisión decidió hacer una referencia más abierta a las “reglas de derecho internacional sobre interpretación de los tratados”.

18. Consiguientemente, el proyecto de artículo 6 es una versión modificada del anterior proyecto de artículo 4 y se centra ahora solo en los factores ajenos al tratado que se deben tener en cuenta a la hora de determinar si el tratado se ha visto afectado o no por un conflicto armado. En otras palabras, en el proyecto de artículo se establece ahora una distinción entre los factores relativos al tratado enunciados en el apartado a) y los factores relativos a las características del conflicto armado enunciados en el apartado b). Con este último apartado se fija una limitación adicional con el propósito de restringir la posibilidad de que los Estados invoquen la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado o el derecho de retiro

aduciendo su participación en conflictos de ese tipo. Cuanto mayor sea la participación de terceros Estados en un conflicto armado no internacional, tanto mayor será la posibilidad de que resulten afectados los tratados, y viceversa.

19. El proyecto de artículo 7 es una versión revisada del proyecto de artículo 5 aprobado en primera lectura. La Comisión decidió reformular el proyecto de artículo 7 con el fin de desarrollar el criterio relativo a la materia de los tratados que se menciona en el apartado a) del proyecto de artículo 6 como uno de los factores que deben tenerse en cuenta para determinar si el tratado es susceptible de terminación, retiro o suspensión en caso de conflicto armado. Por lo tanto, el proyecto de artículo sirve para explicar sobre qué base la Comisión elaboró la lista incluida en el anexo del proyecto de artículos en la que figuran los tratados que, en razón de su materia, continúan aplicándose, en todo o en parte, durante un conflicto armado, y también sirve para introducir en el texto del proyecto de artículos una remisión expresa al anexo. Se conservó en su mayor parte la versión del anexo aprobada en primera lectura, con algunas modificaciones y adiciones. Se eliminó la categoría de los tratados relativos al arbitraje comercial porque su inclusión en el anexo no estaba justificada por una práctica uniforme. La lista de los tratados es de carácter indicativo. No se presenta en ningún orden en particular y no refleja una jerarquía de instrumentos. Por otro lado, el hecho de que no se hayan incluido otros tratados en la lista no debería dar lugar a ningún tipo de interpretación *a contrario*, ya que la supervivencia de dichos tratados en caso de conflicto armado seguirá dependiendo de la aplicación de los proyectos de artículo 4 a 6.

20. En el capítulo II de la segunda parte, titulado “Otras disposiciones relativas a la aplicación de los tratados”, figuran los proyectos de artículo 8 a 13. El proyecto de artículo 8, relativo a la cuestión de la celebración de tratados durante un conflicto armado, se aprobó sin grandes cambios en relación con el texto aprobado en primera lectura (el proyecto de artículo 6). En el proyecto de artículo 9 se establece la obligación de notificar la intención de dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación en caso de conflicto armado. Se introdujo un cambio sustancial en el párrafo 3, en el que ahora se señala que las objeciones a la notificación deberán presentarse en un tiempo “razonable”. Se añadieron dos párrafos a lo

que había sido el proyecto de artículo 8 en el texto aprobado en primera lectura. Según el nuevo párrafo 4, cuando se formule una objeción con arreglo al párrafo 3, los Estados afectados deberán buscar una solución pacífica de la controversia por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Con el nuevo párrafo 5 se intentan preservar los derechos o las obligaciones de los Estados respecto del arreglo de controversias, en la medida en que hayan seguido siendo aplicables en caso de conflicto armado. Se mantuvieron los proyectos de artículo 10 a 12 sobre la base de la formulación de las disposiciones correspondientes aprobadas en primera lectura, con algunos ajustes de redacción. El proyecto de artículo 13, relativo al restablecimiento o reanudación de las relaciones convencionales tras un conflicto armado, es una combinación del proyecto de artículo 18 aprobado en primera lectura, cuya sustancia se reproduce ahora en el párrafo 1, y del proyecto de artículo 12 aprobado en primera lectura, que se refleja ahora en el párrafo 2.

21. Por último, en la tercera parte, titulada “Disposiciones generales”, figuran los proyectos de artículo 14 a 18, todos los cuales se conservaron en gran medida en la forma aprobada en primera lectura, con algunos ajustes de redacción. Cabe señalar que la Comisión no aceptó las propuestas de ampliar el alcance del proyecto de artículo 15 para que abarcara no solo los actos de agresión sino también el recurso a la fuerza en violación del Artículo 2, párrafo 4, de la Carta de las Naciones Unidas. Además, se desplazó el proyecto de artículo 16 para situarlo detrás del actual proyecto de artículo 15, a fin de agruparlo con las demás cláusulas de salvaguardia al final del proyecto de artículos. Asimismo, se suprimió la referencia a las decisiones adoptadas por el Consejo de Seguridad de conformidad con “las disposiciones del Capítulo VII” de la Carta de las Naciones Unidas, habida cuenta de que el Consejo de Seguridad podría adoptar decisiones igualmente pertinentes en virtud de otras disposiciones de la Carta. A la luz del proyecto de artículo 4, también se excluyó del actual proyecto de artículo 18 la referencia al acuerdo de las partes.

22. Para concluir su reseña del proyecto de artículos, el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional señala a la atención los párrafos 98 y 99 del informe de la Comisión, en que se rinde homenaje al Relator Especial, Sr. Lucius Caflisch, bajo cuya acertada dirección se llevaron a feliz término los trabajos, y al anterior Relator Especial, Sir Ian Brownlie.

23. En cuanto al capítulo VIII del informe de la Comisión (Expulsión de extranjeros), el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional dice que esta tuvo ante sí la segunda adición del sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/625/Add.2) y el séptimo informe del Relator Especial (A/CN.4/642), además de la información y las observaciones recibidas hasta la fecha de los gobiernos (A/CN.4/604 y A/CN.4/628 y Add.1). En la segunda adición del sexto informe, que contiene la versión más reciente de los proyectos de artículo que se propondrán sobre el tema, se terminan de examinar los procedimientos de expulsión y se examinan, además, las consecuencias jurídicas de la expulsión respecto del derecho de propiedad de los extranjeros objeto de expulsión y la responsabilidad del Estado que dispone la expulsión. En el séptimo informe, básicamente, se pasa revista a las últimas novedades sobre el tema, empezando por las novedades en el plano nacional y examinando posteriormente los aspectos pertinentes del fallo de la Corte Internacional de Justicia en la causa *Ahmadou Sadio Diallo*. También se incluye una recapitulación reestructurada de los proyectos de artículo.

24. Entre las cuestiones generales abordadas durante el debate sobre el tema, resumidas en los párrafos 229 a 263 del informe de la Comisión de Derecho Internacional, figuraron la posible repercusión de los proyectos de artículo propuestos en la práctica de los Estados; el grado en que los proyectos de artículo corresponden a la esfera de la codificación o constituyen un desarrollo progresivo del derecho internacional; la importancia de tener debidamente en cuenta la práctica contemporánea; la medida en que se deben considerar la práctica y la jurisprudencia resultante de regímenes especiales, como el derecho de la Unión Europea; y la necesidad de mejorar la cooperación entre los Estados interesados, incluido el Estado de la nacionalidad del extranjero objeto de expulsión. También se debatió la forma que podría adoptar el producto final.

25. En lo que respecta a la ejecución de una resolución de expulsión, que es el objeto del proyecto de artículo D1 (Retorno del extranjero objeto de la expulsión al Estado de destino), algunos miembros acogieron con beneplácito la propuesta de alentar la salida voluntaria de un extranjero objeto de expulsión, siempre y cuando las medidas adoptadas a tal fin no dieran lugar a presiones indebidas sobre el extranjero. Según otra opinión, debía resaltarse que la salida

voluntaria no era más que una opción, por cuanto no existía suficiente práctica para fundamentar la obligación del Estado autor de la expulsión de alentar a un extranjero a cumplir voluntariamente una resolución de expulsión. En cuanto a la ejecución de la resolución, se propuso además que se considerara la idea de recluir al extranjero, al menos cuando no existieran razones reales de orden público o seguridad nacional.

26. Con respecto al proyecto de artículo E1 (Estado de destino del extranjero expulsado), el debate se centró en la prioridad que debía darse al Estado de la nacionalidad del extranjero; la elección por el extranjero del Estado de destino; y la cuestión de si Estados distintos del Estado de la nacionalidad, como el Estado de residencia, el Estado de expedición del pasaporte y el Estado de embarque, estaban obligados a admitir a la persona expulsada.

27. Varios miembros apoyaron el proyecto revisado de artículo F1 (Protección de los derechos humanos del extranjero objeto de expulsión en el Estado de tránsito), que dispone que las normas aplicables en el Estado autor de la expulsión a la protección de los derechos humanos del extranjero objeto de expulsión deberán aplicarse *mutatis mutandis* en el Estado de tránsito. Otros miembros estimaron que debía aclararse esa disposición; en particular, se señaló que el Estado de tránsito solo debía cumplir con sus propias obligaciones y no con las que en principio eran vinculantes solamente para el Estado autor de la expulsión.

28. En lo referente a la protección de los bienes del extranjero, varios miembros apoyaron el proyecto de artículo G1, relativo, por un lado, a la prohibición de la expulsión de un extranjero con el fin de confiscar sus bienes y, por el otro, a la protección de los bienes, la posibilidad de disponer libremente de ellos y la restitución de los mismos. Se expresaron algunas dudas, sin embargo, en cuanto a la inclusión de tal prohibición, dada la dificultad de evaluar objetivamente las verdaderas intenciones del Estado que dispone la expulsión. Se plantearon igualmente otras cuestiones, como la posibilidad de distinguir, en el contexto de la protección de los bienes, entre extranjeros que se encuentren legal o ilegalmente en el territorio del Estado autor de la expulsión; la relación entre la obligación de restituir los bienes al extranjero, según lo establecido en el párrafo 2, y el derecho de todo Estado a expropiar dichos bienes siempre que se

cumplan determinadas condiciones; y el caso particular de los bienes que se hayan adquirido ilegalmente.

29. El derecho a regresar al Estado autor de la expulsión (proyecto de artículo H1) en caso de expulsión ilícita fue objeto de un animado debate acerca de si se trataba de una cuestión *de lege lata* o *de lege ferenda* y acerca de las condiciones para ejercer dicho derecho y sus posibles implicaciones. Algunos miembros consideraron que el proyecto de artículo H1, propuesto como desarrollo progresivo, ofrecía una solución equilibrada en ese sentido, mientras que otros miembros estimaron que su formulación era demasiado amplia. En particular, se sugirió que el reconocimiento del derecho a regresar debía limitarse a los casos en que la resolución de expulsión fuera anulada por motivos de fondo, o incluso únicamente a los casos en que se violara una norma sustantiva del derecho internacional. Del mismo modo, se respaldó el principio de que solo los extranjeros que se encontraran legalmente en el territorio del Estado autor de la expulsión podían acogerse al derecho a regresar en caso de expulsión ilícita.

30. El proyecto de artículo I1 (Responsabilidad del Estado en caso de expulsión ilícita) recibió amplio apoyo. Algunos miembros instaron a que se abordara con prudencia el concepto de indemnización específica por interrupción del “proyecto de vida”, reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que el Relator Especial había propuesto examinar en el comentario.

31. Varios miembros se mostraron a favor del proyecto de artículo J1 (Protección diplomática), mientras que otros opinaron que bastaría con hacer mención de la protección diplomática en el comentario del proyecto de artículo I1. Asimismo, algunos miembros sugirieron que se hiciera referencia, en otro proyecto de artículo o en el comentario, a los mecanismos de denuncia individuales a los que podía recurrir un extranjero expulsado en virtud de tratados relativos a la protección de los derechos humanos.

32. En cuanto a la expulsión en relación con la extradición, cuestión a la que se refiere el proyecto de artículo 8 revisado que se reproduce en la nota de pie de página 540 del informe de la Comisión de Derecho Internacional (A/66/10), se expresaron opiniones encontradas respecto de la inclusión de esa disposición y su posible contenido.



33. La cuestión de los recursos contra una resolución de expulsión fue otra de las que dio lugar a un animado debate. Algunos miembros convinieron con el Relator Especial en que el derecho a impugnar una resolución de expulsión se recogía de forma adecuada en el proyecto de artículo C1 y que no era necesario refrendarlo en un proyecto de artículo aparte, sobre todo teniendo en cuenta las considerables diferencias que existían entre las legislaciones y prácticas nacionales. Otros miembros expresaron la opinión de que debía formularse un proyecto de artículo específico sobre el tema, en la medida en que ese derecho se reconocía en el derecho internacional consuetudinario. Se expresaron opiniones opuestas con respecto a la formulación de una norma, en el marco del desarrollo progresivo, sobre el efecto suspensivo de los recursos contra una resolución de expulsión. Algunos miembros observaron que los recursos que no tuvieran efecto suspensivo serían ineficaces, mientras que otros afirmaron que los recursos con efecto suspensivo impedirían el ejercicio efectivo del derecho de expulsión y que el reconocimiento del efecto suspensivo presentaba algunos inconvenientes relacionados con la inseguridad jurídica a que daban lugar las demoras procesales.

34. Al término del debate, la Comisión decidió remitir al Comité de Redacción los proyectos de artículo D1, E1, G1, H1, I1 y J1, en la forma en que figuraban en la segunda adición del sexto informe; el proyecto de artículo F1 que figuraba en esa misma adición, en su forma revisada por el Relator Especial durante el período de sesiones; y el proyecto de artículo 8, en su forma revisada por el Relator Especial en el 62º período de sesiones. También decidió remitir al Comité de Redacción la recapitulación reestructurada de los proyectos de artículo que figuraba en el séptimo informe del Relator Especial.

35. El Comité de Redacción prácticamente ha concluido su labor acerca de los proyectos de artículo sobre la expulsión de extranjeros, con vistas a presentarlos a la Comisión para que los apruebe en primera lectura en 2012. Entretanto, la Comisión solicitó a los Estados que formularan observaciones sobre el debatido tema del efecto suspensivo de los recursos presentados contra una resolución de expulsión. En ese contexto, el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional señaló a la atención el capítulo III, párrafos 42 a 44, del informe de la Comisión.

36. Al presentar el capítulo IX del informe (Protección de las personas en casos de desastre), el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional dice que esta aprobó provisionalmente los proyectos de artículo 6 a 9 (A/CN.4/L.776), junto con sus comentarios, que habían sido aprobados provisionalmente por el Comité de Redacción en 2010 pero de los que la Comisión solo había tomado nota por falta de tiempo. La Comisión examinó el cuarto informe del Relator Especial sobre el tema (A/CN.4/643 y Corr.1), que contenía propuestas para los proyectos de artículo 10 a 12, y, posteriormente, elaboró una versión provisional de los proyectos de artículo 10 y 11, con sus comentarios. El Comité de Redacción no ha podido finalizar su labor sobre el proyecto de artículo 12 en el tiempo asignado. Se espera, por tanto, que la Comisión concluya el examen de ese proyecto de artículo en 2012.

37. El proyecto de artículo 6 reitera los principios humanitarios básicos aplicables en casos de desastre, en particular los principios de humanidad, neutralidad e imparcialidad, debidamente reconocidos como fundamento de la asistencia humanitaria y recogidos en un número importante de instrumentos y textos, incluidas resoluciones de la Asamblea General. El principio de humanidad es la piedra angular de la protección de las personas en el derecho internacional, mientras que el principio de neutralidad se refiere al carácter apolítico de las medidas adoptadas en respuesta a los desastres. El principio de imparcialidad se refiere al carácter cualitativo de la respuesta, en el sentido de que esta debe satisfacer las necesidades esenciales de las personas afectadas por un desastre, y comprende tres aspectos, a saber, la no discriminación, la proporcionalidad entre el grado de sufrimiento y la urgencia y la imparcialidad en sí misma, que supone la obligación de no establecer distinciones sustantivas entre las personas en razón de criterios distintos del de la necesidad. El principio de no discriminación refleja la igualdad inherente de todas las personas y la idea de que no cabe hacer distinción alguna que entrañe un perjuicio entre ellas. La Comisión determinó que la no discriminación debía reflejarse como principio autónomo, habida cuenta de su importancia para el tema.

38. El proyecto de artículo 7 se refiere al concepto de dignidad humana, que es el principio fundamental que sustenta todos los derechos humanos. Si bien el concepto de dignidad humana está relacionado con el principio de humanidad que figura en el proyecto de

artículo 6, se trata de conceptos distintos. En el contexto de la protección de las personas en casos de desastre, la dignidad humana figura como principio rector, tanto en lo que se refiere a las medidas que se adopten en el marco de la prestación de socorro como en la evolución constante de la legislación que regula la respuesta a los desastres.

39. En el proyecto de artículo 8 se afirma el derecho de las personas afectadas por los desastres a que se respeten sus derechos y se recoge, implícitamente, la obligación correspondiente de proteger esos derechos. Esa disposición se incluyó en los proyectos de artículo como indicación general de la existencia de obligaciones en materia de derechos humanos, sin que el objetivo haya sido especificar, desarrollar o calificar dichas obligaciones. La referencia a los “derechos humanos” abarca tanto los derechos sustantivos como las limitaciones (por ejemplo, la posibilidad de dejar sin efecto determinados derechos conforme a lo previsto en las normas internacionales de derechos humanos en vigor).

40. El proyecto de artículo 9 se refiere al papel del Estado afectado. En el párrafo 1 se recoge la obligación del Estado afectado de proteger a las personas y prestarles socorro en casos de desastre de conformidad con el derecho internacional. En el párrafo 2 se afirma el papel principal que corresponde al Estado afectado en la respuesta a los desastres en su territorio. En su conjunto, el proyecto de artículo 9 se basa en los principios fundamentales de soberanía y no intervención, respectivamente, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas y reconocidos en numerosos instrumentos internacionales.

41. El proyecto de artículo 10 aborda la situación particular en que un desastre supera la capacidad nacional de respuesta de un Estado. En tales circunstancias, el Estado afectado tiene el deber de buscar asistencia de otros Estados, las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales competentes y organizaciones no gubernamentales pertinentes. La Comisión considera que dicha cooperación es procedente y necesaria en la medida en que se vea superada la capacidad nacional de respuesta del Estado afectado.

42. El proyecto de artículo 11 se ocupa del consentimiento del Estado afectado para la asistencia externa. En su conjunto, dicho proyecto de artículo establece un régimen de consentimiento cualificado de

los Estados afectados en relación con las operaciones de socorro en casos de desastre. El párrafo 1 refleja el principio fundamental de que la prestación de asistencia internacional de socorro depende del consentimiento del Estado afectado. El párrafo 2 estipula que el consentimiento para la asistencia externa no se denegará arbitrariamente, y el párrafo 3 impone al Estado afectado el deber de comunicar su decisión sobre el ofrecimiento cuando sea posible.

43. Como ya se indicó, la Comisión no ha podido concluir su examen de la propuesta del Relator Especial en relación con el proyecto de artículo 12, que se refiere al derecho de terceros, incluidos Estados, organizaciones internacionales u organizaciones no gubernamentales, a ofrecer asistencia.

44. Por último, el Presidente de la Comisión de Derecho Internacional señala a la atención el capítulo III del informe de la Comisión, en particular los párrafos 43 y 44, en los que esta reitera que recibiría con interés cualquier información relativa a la práctica de los Estados sobre el tema, incluidos ejemplos de legislación interna. En particular, la Comisión desearía recibir información y observaciones sobre problemas jurídicos e institucionales específicos surgidos al hacer frente a desastres o responder a ellos. Por otro lado, en lo que se refiere a la opinión de la Comisión de que los Estados tienen la obligación de cooperar con el Estado afectado en las actividades de socorro en casos de desastre, se invita a los gobiernos a que formulen observaciones sobre si el deber de cooperar incluye el deber de los Estados de prestar asistencia cuando lo solicite el Estado afectado.

45. **El Sr. Gussetti** (Observador de la Unión Europea), hablando también en nombre de Croacia, Islandia, Montenegro y la ex República Yugoslava de Macedonia, países candidatos, de Albania y Bosnia y Herzegovina, países del proceso de estabilización y asociación, y de la República de Moldova, dice que, como ya ha señalado su delegación, el sexto informe del Relator Especial (A/CN.4/625 y Add.1 y 2), al poner de relieve el posible papel del derecho y la jurisprudencia de la Unión Europea como modelo para los proyectos de artículo sobre la expulsión de extranjeros, no ha tenido suficientemente en cuenta la distinción fundamental, que se desprende de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre las normas aplicables a los ciudadanos europeos y a los no europeos. En el informe tampoco se señaló que, conforme al derecho de la Unión

Europea, las normas aplicables a los ciudadanos de la Unión Europea en materia de expulsión no se pueden aplicar automáticamente a los extranjeros. Además, el informe tendió a centrarse en documentos algo anticuados de la Unión Europea, incluidos actos legislativos que han sido revocados o sustituidos. En la carta de la delegación de la Unión Europea en respuesta a la solicitud de información específica contenida en el informe de 2009 de la Comisión de Derecho Internacional (A/64/10) se incluyó una explicación detallada del derecho y la jurisprudencia de la Unión Europea en relación con el tema, además de copias de la legislación pertinente y un acuerdo de readmisión, ninguna de las cuales parece haber sido distribuida a la Comisión o examinada por el Relator Especial.

46. De la legislación actual de la Unión Europea, el instrumento más importante para el tema es la Directiva 2008/115/CE, relativa a normas y procedimientos comunes de los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, conocida como Directiva sobre el retorno, en la que se establecen normas comunes claras, transparentes y justas sobre el retorno, la expulsión, la detención y el reingreso, teniendo plenamente en cuenta el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas afectadas. La Directiva establece un marco jurídico vinculante común para una política europea en materia de retorno y garantiza que todos los retornos se lleven a cabo de manera humana y digna. Entre las características principales de la Directiva figuran la obligación de seguir un procedimiento justo y transparente para las decisiones relativas al retorno o la expulsión de nacionales de terceros países en situación irregular; la obligación de los Estados miembros de adoptar una decisión de retorno respecto de dichos nacionales o, en caso contrario, otorgarles un permiso de residencia y evitar así situaciones de limbo jurídico; la promoción del principio de salida voluntaria mediante el establecimiento de una norma general en virtud de la cual, en circunstancias normales, ha de concederse un plazo para abandonar voluntariamente el país; el respeto de un conjunto mínimo de derechos básicos de los nacionales de terceros países a la espera de ser expulsados, incluido el acceso a la atención sanitaria básica y el acceso de los niños a la educación; la limitación del uso de medidas coercitivas en relación con la expulsión de personas y la prohibición de que tales medidas sean excesivas o desproporcionadas; el establecimiento de una dimensión europea respecto de

los efectos de las medidas nacionales de retorno mediante la estipulación de una prohibición de entrada que sea válida en toda la Unión Europea; y la limitación del uso de la detención con fines de expulsión, supeditándolo al principio de proporcionalidad y estableciendo salvaguardias mínimas para los detenidos.

47. La Directiva es también el primer instrumento jurídico de la Unión Europea que proporciona un catálogo común de derechos específicos de los nacionales de terceros países en situación irregular y, en particular, amplía a esas personas el derecho de no devolución, que anteriormente el derecho de la Unión Europea concedía solo a los solicitantes de asilo.

48. La delegación de la Unión Europea está de acuerdo con la Comisión de Derecho Internacional en que las prácticas y la jurisprudencia resultante de regímenes especiales como el derecho de la Unión Europea se deben abordar con cautela, habida cuenta de las diferencias fundamentales ya subrayadas. Sin embargo, pronto serán más de 30 los Estados de la Unión Europea con normas jurídicas acordes con las disposiciones de la Directiva sobre el retorno, que establece las normas relativas al trato de los nacionales de países que no son miembros de la Unión Europea. Algunas de las garantías aplicables en los casos de expulsión de nacionales de la Unión Europea podrían, por tanto, ser pertinentes para la formación del derecho internacional, en la medida en que reflejan la práctica de los Estados.

49. Con respecto a la nueva jurisprudencia pertinente para el tema, el 28 de abril de 2011 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó una importante sentencia en una causa penal de gran interés y alcance (asunto C-61/11 PPU) contra un nacional de un tercer país, el Sr. El Dridi, que había sido condenado en Italia a un año de prisión por el delito de permanencia ilegal en el territorio italiano sin causa justificada, al no haber cumplido una orden de expulsión dictada contra él. Después de examinar las disposiciones pertinentes de la Directiva sobre el retorno y teniendo en cuenta el requisito de proporcionalidad y debido respeto de los derechos fundamentales, entre otras cosas, en todas las etapas del procedimiento de retorno, el Tribunal llegó a la conclusión de que un Estado miembro de la Unión Europea obligado por la Directiva no podía contemplar en su legislación la imposición de una pena de prisión a un nacional de un tercer país en situación irregular por el único motivo de que permaneciera en el territorio de ese Estado, sin causa justificada, con

infracción de una orden de salida de dicho territorio en un plazo determinado.

50. En cuanto a la cuestión de si los recursos presentados contra una resolución de expulsión tienen efecto suspensivo, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13, párrafos 1 y 2, de la Directiva sobre el retorno se debe otorgar a los nacionales de terceros países el derecho efectivo a recurrir o solicitar que se revisen las decisiones relativas al retorno y las instancias de apelación están facultadas para revisar esas decisiones y pueden asimismo suspender temporalmente su ejecución.

51. En pocas palabras, la legislación de la Unión Europea y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativas a los nacionales de terceros países son, sin duda, pertinentes para el tema y forman parte de la práctica actual de los Estados de la región que obliga a los Estados miembros de la Unión Europea, así como a un número significativo de otros Estados de Europa que son Estados Miembros de las Naciones Unidas. Deberían, por tanto, tenerse debidamente en cuenta en el proceso de elaboración de proyectos de artículo y comentarios autorizados.

52. Respecto del tema de la protección de las personas en casos de desastre, el Observador de la Unión Europea dice que la labor realizada hasta ahora por la Comisión de Derecho Internacional en relación con la elaboración de los proyectos de artículo es particularmente oportuna, dado el número y la intensidad cada vez mayores de los desastres naturales, los numerosos desafíos actuales a escala mundial vinculados entre sí y los problemas relacionados con el acceso a la asistencia humanitaria y la necesidad de subsanar las lagunas existentes en el régimen de protección internacional. Habida cuenta de que la Unión Europea presta una parte importante de la ayuda humanitaria internacional y es un actor clave en la prestación de socorro de emergencia a las víctimas de desastres naturales y provocados por el hombre, la delegación de la Unión Europea apoya firmemente el fortalecimiento constante del sistema humanitario internacional. Asimismo, está firmemente convencida de que la labor de la Comisión en relación con el tema contribuirá al objetivo de promover el respeto y el fortalecimiento del régimen jurídico internacional relativo a la protección de las personas en casos de desastre.

53. La Unión Europea tiene a su disposición dos instrumentos principales, a saber, la asistencia

humanitaria y la protección civil, para asegurar la prestación rápida y efectiva de socorro a las personas que sufren las consecuencias inmediatas de los desastres. En el primer caso, la competencia de la Unión Europea y la ejecución de sus operaciones de ayuda humanitaria se rigen, respectivamente, por el artículo 4, párrafo 4, y el artículo 214, párrafos 1 y 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Las operaciones de ayuda humanitaria se rigen a su vez por el Reglamento (CE) núm. 1257/96, de 20 de junio de 1996, sobre la ayuda humanitaria, que es vinculante en su totalidad para los 27 miembros de la Unión Europea. El resultado práctico es el suministro de fondos a unos 200 asociados, entre organizaciones no gubernamentales, organismos de las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y varios organismos especializados de los Estados miembros de la Unión Europea. La política general de ayuda humanitaria está plasmada en el Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria, instrumento que no es jurídicamente vinculante pero que ofrece una visión común que sirve de guía a la Unión Europea y sus Estados miembros en la prestación de ayuda humanitaria a terceros países.

54. En lo que respecta a la protección civil, la Unión Europea alienta y facilita la cooperación entre los Estados participantes en el Mecanismo Comunitario de Protección Civil y el Instrumento de Financiación de la Protección Civil, que no solo abarcan a todos los miembros de la Unión Europea, sino también a Croacia, Islandia, Liechtenstein y Noruega. Los Estados miembros de la Unión Europea facilitan recursos que se utilizan para prestar asistencia en el seno de la Unión y a terceros países afectados por desastres, previa solicitud del Gobierno del país interesado.

55. Con respecto al tema de la protección de las personas, que se examina en el informe más reciente de la Comisión (A/66/10), la delegación de la Unión Europea acoge con agrado los esfuerzos realizados para aclarar el marco jurídico específico relativo al acceso a la ayuda humanitaria en situaciones de desastre, la inclusión en los proyectos de artículo sobre el tema de los principios fundamentales que rigen el socorro en casos de desastre y el reconocimiento provisional de diversos deberes de los Estados afectados. La Unión Europea respalda el proyecto de

artículo 9 aprobado provisionalmente por la Comisión, relativo al deber del Estado afectado de asegurar la protección de las personas y la prestación de socorro y asistencia en casos de desastre en su territorio, y observa que un deber similar fue expresamente reconocido en el Consenso europeo sobre la ayuda humanitaria y se menciona, además, en la legislación de la Unión Europea, en particular en la Decisión del Consejo por la que se establece un Instrumento de Financiación de la Protección Civil.

56. La delegación de la Unión Europea está de acuerdo con la premisa, formulada en los proyectos de artículo 10 y 11, de que la responsabilidad primordial de proteger a las personas incumbe al Estado afectado. En ese contexto, desea señalar a la atención de la Comisión el preámbulo del Reglamento núm. 1257/96 sobre la ayuda humanitaria, antes mencionado, en que se afirma que “las poblaciones afectadas víctimas de catástrofes naturales, de acontecimientos tales como guerras y conflictos o de otras circunstancias extraordinarias comparables tienen el derecho de recibir una asistencia humanitaria internacional cuando se demuestra que no pueden ser eficazmente socorridas por sus propias autoridades”.

57. Por último, en lo que respecta a una cuestión más técnica y teniendo en cuenta su propia labor y la de sus organizaciones asociadas, la delegación de la Unión Europea celebra que, en los proyectos de artículo 5, 7 y 10 aprobados provisionalmente y en el proyecto de artículo 12 que se remitió al Comité de Redacción, la Comisión de Derecho Internacional haya reconocido el papel de las organizaciones internacionales y otros agentes humanitarios en la protección de las personas en casos de desastre. No obstante, la referencia en esos proyectos de artículo a las Naciones Unidas, otras organizaciones intergubernamentales competentes y organizaciones no gubernamentales pertinentes podría plantear la cuestión de si dichas disposiciones se aplican también a las organizaciones de integración regional como la Unión Europea. A fin de disipar cualquier duda a ese respecto, el orador sugiere que en los proyectos de artículo en cuestión se mencionen expresamente las organizaciones de integración regional o que, en su defecto, la inclusión de esas organizaciones quede clara en los comentarios.

58. **La Sra. Kaukoranta** (Finlandia), hablando en nombre de los países nórdicos (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia), dice que estos apoyan el enfoque general adoptado por la Comisión en sus

recomendaciones a la Asamblea General en relación con el proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados. Ese proyecto de artículos debería aplicarse también a los efectos de los conflictos armados internos en las relaciones convencionales del Estado afectado y debería tener un ámbito de aplicación lo suficientemente amplio para abarcar los casos en que solo uno de los Estados partes en un tratado sea parte en un conflicto armado. Por consiguiente, los países nórdicos acogen con beneplácito la formulación del proyecto de artículo 1 respecto de ambas cuestiones. La definición de conflicto armado formulada en el proyecto de artículo 2, apartado b), es igualmente satisfactoria, ya que refleja con exactitud el significado de ese concepto en el derecho internacional humanitario y, al mismo tiempo, tiene en cuenta el contexto específico del proyecto de artículos. La oradora se felicita, asimismo, de la inclusión del proyecto de artículo 6, que esclarece la secuencia en que se deberán analizar los posibles indicios de si un tratado es susceptible de terminación, retiro o suspensión. En cuanto a la lista indicativa de tratados a que se hace referencia en el proyecto de artículo 7, habría sido preferible incorporarla en el comentario del proyecto de artículo. El principio de presunción de la continuación de la aplicación de los tratados ha sido sistemáticamente respaldado por los países nórdicos, si bien algunas de las disposiciones de un tratado que continúe aplicándose no deberían necesariamente aplicarse tal cual, dada la necesidad de tener en cuenta algunos principios convencionales básicos durante los conflictos armados. La formulación de un proyecto de artículo con una declaración de principios en ese sentido sería una solución adecuada.

59. Los países nórdicos no son los únicos que se muestran escépticos respecto de la utilidad de los esfuerzos de la Comisión por identificar normas generales del derecho internacional en relación con el tema de la expulsión de extranjeros. Habida cuenta de que ya existen un conjunto considerable de normas regionales detalladas, la Comisión haría una mejor inversión de su tiempo y sus recursos limitados ocupándose de otros temas más importantes de su programa.

60. En relación con el tema de la protección de las personas en casos de desastre, incumbe a los Estados afectados el deber primordial de proteger a las personas y prestarles socorro en casos de desastre mediante la iniciación, organización, coordinación y

prestación de asistencia humanitaria dentro de su territorio. Aunque el Estado afectado está mejor situado para evaluar las necesidades en ese sentido, su responsabilidad no debe seguir siendo exclusiva. Por lo tanto, los países nórdicos acogen con agrado los esfuerzos del Relator Especial para lograr un equilibrio adecuado en el proyecto de artículo 10 entre la soberanía del Estado y su deber de recabar ayuda, al igual que la disposición fundamental contenida en el proyecto de artículo 11 relativo al deber de los Estados de no denegar arbitrariamente su consentimiento para la asistencia externa. En cuanto a la labor que se sigue realizando en relación con el proyecto de artículo 12 (Derecho a ofrecer asistencia), los países nórdicos reconocen y agradecen el interés de la comunidad internacional en la protección de las personas en los casos en que el desastre supere la capacidad nacional de respuesta del Estado afectado, lo que debería considerarse un aspecto complementario de la responsabilidad primordial que incumbe al Estado afectado de proteger a las personas en su territorio. Como señaló el Relator Especial, el ofrecimiento de asistencia es una expresión de solidaridad.

61. **La Sra. Defensor Santiago** (Filipinas) dice que el punto de partida y el marco de referencia con respecto al tema de los efectos de los conflictos armados en los tratados debe ser siempre el compromiso contraído por los Estados en virtud de la Carta de las Naciones Unidas de prevenir los conflictos y solucionar pacíficamente las controversias, teniendo presente la responsabilidad vital y permanente, tanto individual como colectiva, de mantener la seguridad y la estabilidad de las relaciones con la comunidad de naciones en su conjunto en el contexto de las obligaciones convencionales. Además, siempre que existan las debidas garantías, redundará en interés de los Estados abordar la cuestión de esos efectos en los tratados. Por ello, la delegación de Filipinas acoge con beneplácito el principio general formulado en el proyecto de artículo 3 sobre el tema y la manera ilustrativa e instructiva en que los proyectos de artículo 4, 5 y 6 se basan en ese principio.

62. La lista indicativa de tratados a que se hace referencia en el proyecto de artículo 7, que abarca esferas como la solución internacional de controversias por medios pacíficos, la protección internacional del medio ambiente y las relaciones diplomáticas y consulares, no implica ningún orden de importancia y refleja acertadamente algunas obligaciones que no

deben ser objeto de suspensión en caso de conflicto armado debido al valor de los principios en cuestión y su importancia para la comunidad internacional. Junto con el proyecto de artículo 10 (Obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado), el proyecto de artículo 7 sirve para reforzar aún más la estabilidad de las obligaciones de los Estados y subrayar la necesidad de respetar la ley en caso de conflicto armado.

63. Con respecto a los restantes proyectos de artículo, el término “conflicto armado”, tal como se define en el proyecto de artículo 2, es de particular interés, ya que permite incluir los efectos de los conflictos armados no internacionales en los tratados. Si bien es cierto que el término “prolongada” introduce un requisito mínimo, debería seguirse examinando y esclareciendo ese aspecto del proyecto de artículos.

64. **El Sr. Koh** (Estados Unidos de América) dice que su delegación observa complacida que el proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados aprobado en segunda lectura sigue preservando la continuidad razonable de las obligaciones convencionales durante los conflictos armados, sin dejar de tener en cuenta necesidades militares específicas ni de proporcionar orientación práctica a los Estados mediante la identificación de los factores pertinentes para determinar si un tratado debe permanecer en vigor en caso de conflicto armado. Sin embargo, definir el término “conflicto armado” puede dar lugar a confusión y ser contraproducente, dada la enorme diversidad de opiniones sobre su significado. La definición que figura en el proyecto de artículo 2, apartado b), debería dejar claro que por “conflicto armado” se entiende el conjunto de los conflictos previstos, respectivamente, en los artículos comunes 2 y 3 de los Convenios de Ginebra. La formulación contenida en el fallo en la causa *Tadić* es un punto de referencia útil, pero no resulta válida en todos los contextos, mientras que los dos artículos comunes disfrutaban de una aceptación casi universal entre los Estados. Por otro lado, el proyecto de artículo 15 (Prohibición de beneficio para un Estado que cometa un acto de agresión) no se debe interpretar en el sentido de que los usos ilícitos de la fuerza que no constituyan una agresión quedan necesariamente excluidos del ámbito de aplicación de la disposición.

65. En cuanto a la recomendación de la Comisión de que la Asamblea General considere la posibilidad, en una fase ulterior, de elaborar una convención basada en

el proyecto de artículos, la delegación de los Estados Unidos opina que el mejor uso que puede hacerse del proyecto de artículos es utilizarlo como orientación para los Estados a la hora de determinar el efecto de un conflicto armado particular en sus relaciones convencionales. Además, habida cuenta de sus opiniones sobre los proyectos de artículo 2, apartado b), y 15, la delegación de los Estados Unidos no apoya la elaboración de dicha convención. La Asamblea General debería simplemente tomar nota del proyecto de artículos y alentar su uso por los Estados en el contexto de situaciones específicas.

66. Los proyectos de artículo revisados sobre la expulsión de extranjeros abordan cuestiones complejas y, por lo tanto, merecen un examen cuidadoso. La metodología reviste una importancia esencial para lograr un equilibrio entre el reconocimiento de la protección de las personas y la necesidad de evitar cualquier restricción indebida del derecho soberano de los Estados a controlar el ingreso en sus territorios y hacer cumplir sus leyes de inmigración. Por tanto, es preciso centrarse principalmente en los principios jurídicos bien establecidos que se recogen en el texto de las convenciones internacionales de derechos humanos que han sido ampliamente ratificadas, en lugar de elaborar nuevos derechos específicos del contexto de la expulsión o importar conceptos de jurisprudencias regionales en las que no participan todos los Estados. Preocupa particularmente a la delegación de los Estados Unidos la incorporación de obligaciones de no devolución en numerosas disposiciones de los proyectos de artículo y la ampliación de tales obligaciones a situaciones que van mucho más allá de las previstas en principios bien establecidos del derecho internacional; por ejemplo, la disposición que figura en el párrafo 2 del proyecto de artículo El (Estado de destino del extranjero expulsado) va más allá de la protección contra la devolución reconocida en la Convención contra la Tortura y en la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados.

67. La extradición debe excluirse del ámbito de aplicación de los proyectos de artículo; la extradición no pertenece a la misma categoría que la expulsión, por cuanto supone el traslado de un extranjero o un nacional con el fin de hacer cumplir una ley específica. Muchas de las propuestas plasmadas en los proyectos de artículo son incompatibles con las prácticas establecidas y las obligaciones contraídas por los

Estados en virtud del régimen de tratados multilaterales y bilaterales de extradición, incluidos los nuevos proyectos de artículo sobre la expulsión encubierta y la extradición encubierta como expulsión.

68. Otra de las preocupaciones de la delegación de los Estados Unidos está relacionada con las distintas referencias a los derechos de las personas después de haber sido expulsadas. En términos generales, y de conformidad con el marco adoptado en los tratados internacionales de derechos humanos, los proyectos de artículo deben aplicarse a las personas que se encuentran en el territorio de un Estado y que están sujetas a la jurisdicción de ese Estado. De no limitarse las obligaciones al trato dispensado a las personas antes de su expulsión, se colocaría a los Estados en la situación imposible de ser responsables de la conducta de terceros después de ocurrida la expulsión.

69. Con respecto a los proyectos de artículo sobre la protección de las personas en casos de desastre, la delegación de los Estados Unidos encomia al Relator Especial por reconocer el papel fundamental desempeñado por los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad y no discriminación en la coordinación y ejecución de las actividades de socorro en casos de desastre y lo alienta a seguir examinando las posibles maneras en que esos principios se relacionan con las actividades de socorro y les dan forma. La delegación de los Estados Unidos también agradece que en los proyectos de artículo 5 y 9 se haya incorporado el principio de que el Estado afectado tiene la responsabilidad primordial de proteger a las personas y prestar asistencia humanitaria en su territorio. En cuanto al proyecto de artículo 12, dada la probabilidad de que se expresen opiniones muy divergentes sobre las cuestiones relacionadas con el “derecho” a ofrecer asistencia, la Comisión tal vez debería estructurar su trabajo de tal manera que se evite la necesidad de hacer un pronunciamiento definitivo sobre esas cuestiones, en aras de facilitar la elaboración de un producto del que la comunidad internacional pueda hacer un uso más práctico.

70. **El Sr. Yee** (Singapur) dice que el proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados es una valiosa recopilación de la práctica de los Estados y de estudios académicos en un ámbito complejo del derecho de los tratados. La delegación de Singapur apoya firmemente el proyecto de artículo 3, en el que se formula de manera clara el principio general de la estabilidad y continuidad en el plano

jurídico, al mismo tiempo que se afirma que los derechos y obligaciones convencionales no se pueden ignorar por el mero hecho de que exista un conflicto armado.

71. Por el contrario, el enfoque analítico plasmado en los proyectos de artículo 5, 6 y 7 resulta algo problemático. En el comentario se afirma que el proyecto de artículo 5 se incluyó por razones de claridad de exposición, cuando en realidad su relación con los proyectos de artículo 6 y 7 debió formularse mejor. Por otra parte, en el comentario del proyecto de artículo 6, apartado a), se reconoce la existencia de cierto solapamiento con el análisis previsto en el proyecto de artículo 5 y, a continuación, se afirma que el “objeto y el fin del tratado cuando se tienen en cuenta con otros factores, como el número de partes, [pueden] abrir una nueva perspectiva”. La delegación de Singapur expresa respetuosamente su desacuerdo con dicha aseveración; las normas enunciadas en los proyectos de artículo 6 y 7 deben tratarse como una aplicación de las reglas normales sobre interpretación de los tratados que se mencionan en el proyecto de artículo 5 y no como normas que se aplican con independencia total o parcial del proyecto de artículo 5.

72. En cuanto a la lista indicativa de tratados a que se hace referencia en el proyecto de artículo 7, sería más adecuado que el análisis se centrara de manera más directa en el carácter de las disposiciones específicas de los tratados con el fin de determinar si estos continúan aplicándose, en lugar de centrarse en la categoría a la que pertenece el tratado. La debilidad de este último enfoque consiste en que abarca tratados que no necesariamente se inscriben en la presunción contemplada en el proyecto de artículo 7. Por consiguiente, la delegación de Singapur sigue albergando dudas acerca de la pertinencia de ese enfoque y prefiere, en cambio, una lista indicativa de tipos específicos de disposiciones convencionales, en lugar de una lista de categorías de tratados.

73. En vista de sus comentarios sobre el tema, la delegación de Singapur no apoya la recomendación de la Comisión a la Asamblea General de que considere la posibilidad, en una fase ulterior, de elaborar una convención basada en el proyecto de artículos.

74. En lo relativo al tema de la expulsión de extranjeros, la delegación de Singapur tratará de presentar por escrito sus respuestas sobre las tres cuestiones concretas planteadas en los párrafos 40 a 42

del informe de la Comisión respecto de las cuales las observaciones serían de particular interés para la Comisión.

75. En relación con el tema de la protección de las personas en casos de desastre, la delegación de Singapur comparte las dudas expresadas por otros acerca de la pertinencia de calificar de derecho el ofrecimiento de asistencia a los Estados previsto en el proyecto de artículo 12. Sería más apropiado hacer hincapié en el deber de los Estados de considerar los ofrecimientos de asistencia recibidos de otros Estados, las Naciones Unidas, organizaciones intergubernamentales u organizaciones no gubernamentales. Por otra parte, la delegación de Singapur no está segura de que todas esas entidades deban tratarse en pie de igualdad jurídica.

76. En cuanto a la cuestión planteada por la Comisión en el párrafo 44 de su informe, a saber, si el deber de cooperar incluye el deber de los Estados de prestar asistencia cuando lo solicite el Estado afectado, el orador señala a la atención el Acuerdo sobre gestión en casos de desastre y respuesta de emergencia aprobado por la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental en 2005. Con arreglo al artículo 4, apartado c), las partes en el Acuerdo solo están obligadas a responder con prontitud a una solicitud de asistencia de la parte afectada, lo que significa que en la práctica no están obligadas a prestar la asistencia solicitada.

77. Por último, la delegación de Singapur apoya firmemente la inclusión del tema “La norma del trato justo y equitativo en el derecho internacional en materia de inversiones” en el programa de trabajo a largo plazo de la Comisión. El orador no comparte la opinión de que se trata de un ámbito demasiado especializado del derecho para que la Comisión se ocupe de él. En primer lugar, el derecho internacional en materia de inversiones no posee un carácter más especializado que muchas otras esferas del derecho internacional público en las que ha trabajado la Comisión. En segundo lugar, las prioridades de la Comisión deben guiarse por el valor práctico y la contribución de su labor a las actividades de los gobiernos y la comunidad internacional en su conjunto y no por la cuestión de si una labor determinada se inscribe o no en un ámbito especializado del derecho internacional.

78. No se pueden pasar por alto el valor práctico y la incidencia de la labor relacionada con la norma del trato justo y equitativo. El movimiento transfronterizo



de inversionistas e inversiones es un fenómeno muy importante y de una magnitud cada vez mayor que reviste gran prioridad tanto para los Estados exportadores como para los Estados receptores. Las corrientes de capital entre países en desarrollo son tan importantes como los movimientos más tradicionales de capital de países desarrollados a países en desarrollo. Posiblemente muchos juristas especializados en derecho internacional público no estén familiarizados con las normas que regulan el trato de esas inversiones, incluido el “trato justo y equitativo”. Sin embargo, la realidad ineludible es que el volumen de la jurisprudencia que emana de ese ámbito, su repercusión en la actividad gubernamental y la cantidad de trabajo jurídico que genera para los juristas del sector público y privado son significativamente mayores que en el caso de muchos otros temas que figuran o han figurado en el programa de la Comisión. El derecho internacional en materia de inversiones no puede permanecer en la periferia del derecho internacional público, sino que debe integrarse en la labor de la Comisión si se quiere que esa labor siga siendo pertinente para las realidades del discurso internacional y las políticas públicas. No se trata de una cuestión de derecho internacional privado, pues los derechos y las obligaciones en cuestión se basan en tratados y se rigen por el derecho internacional público, no por el derecho interno. Esos derechos y obligaciones no están comprendidos en el mandato de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, en la medida en que la labor de esta última en relación con las normas de arbitraje en materia de inversiones no afecta a las normas sustantivas, que son normas de derecho internacional público.

79. La necesidad de realizar un estudio a fondo de la norma relativa al “trato justo y equitativo” queda subrayada por el hecho de que la mayor parte de la jurisprudencia en ese ámbito procede de las decisiones de tribunales de arbitraje sobre reclamaciones presentadas por inversionistas privados contra los Estados. Esos tribunales son por lo general tribunales *ad hoc* y muchos de ellos tienen pocos conocimientos especializados en derecho internacional público, pero sus pronunciamientos acerca de si las medidas adoptadas por los Estados violan o no los criterios jurídicos del “trato justo y equitativo” son a menudo de gran alcance y se refieren a reclamaciones de cientos de millones de dólares. La jurisprudencia existente se beneficiaría enormemente de un estudio autorizado en

la materia y de la formulación de los principios pertinentes por la Comisión, lo que facilitaría la uniformidad en la interpretación y, en consecuencia, mejoraría la seguridad jurídica tanto para los inversionistas como para los gobiernos.

80. En cuanto a los demás temas nuevos, la delegación de Singapur se suma a la opinión de que la Comisión debe dar prioridad a los temas “Formación y documentación del derecho internacional consuetudinario” y “Aplicación provisional de los tratados”, que guardan una relación directa con un aspecto central del derecho internacional público, a saber, la doctrina de las fuentes. En ambos casos, acogería con beneplácito la elaboración de productos finales concisos que pudieran servir de orientación práctica y autorizada en relación con esos importantes temas.

81. **El Sr. Sarkowicz** (Polonia) dice que hay margen para seguir mejorando algunos de los elementos fundamentales de la versión más reciente del proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados. El enfoque sobre el tema se basa en el artículo 73 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969, que excluye tres esferas del ámbito de aplicación de la Convención y, al mismo tiempo, refuerza su aplicabilidad a la materia de los tratados en todos los demás ámbitos no afectados por esas exclusiones. Esa designación del ámbito de aplicación debe seguirse a la letra e interpretarse con la mayor cautela. El artículo 73 de la Convención se refiere a la ruptura de hostilidades entre Estados, pero no excluye del ámbito de aplicación de la Convención las hostilidades de carácter interno; la Convención debe, por tanto, aplicarse a las relaciones convencionales entre los Estados durante los conflictos armados internos. La Comisión debería estudiar con mayor detenimiento la práctica contemporánea de los Estados, con miras a proponer soluciones que reflejen dicha práctica, y asegurarse así de que los resultados estén en consonancia con la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

82. En cuanto a los proyectos de artículo sobre la expulsión de extranjeros, la delegación de Polonia apoya la recapitulación reestructurada que figura en el séptimo informe del Relator Especial (A/CN.4/642). No obstante, sugiere que se reestructure de nuevo el capítulo III de los proyectos de artículo (Derechos fundamentales de las personas objeto de expulsión), que es desproporcionadamente largo. Una solución

podría ser incorporar la sección A (Disposiciones generales) en el capítulo I.

83. La delegación de Polonia se felicita de los progresos realizados en un período relativamente breve en relación con el tema de la protección de las personas en casos de desastre, habida cuenta de su urgencia a la luz del número cada vez mayor de pérdidas producidas por los peligros naturales. Las diversas actividades para la reducción de los desastres emprendidas por la Asamblea General a la luz de las amenazas y los desafíos que plantean esos peligros han persuadido a los Estados, las organizaciones internacionales, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones académicas de centrar su atención en el papel del derecho en la respuesta a las situaciones de desastre, con el objetivo de transformar la asistencia humanitaria internacional en casos de desastre de una actividad basada en un enfoque reactivo a una basada en un sistema preventivo. La preparación para casos de desastre debe convertirse en una parte importante de un enfoque holístico de ese tipo de asistencia y debe quedar debidamente plasmada en un marco jurídico y reglamentario internacional.

84. La consolidación de un concepto nuevo como el derecho relativo al socorro en casos de desastre, sin embargo, dependerá en gran medida del trabajo de la Comisión en el ámbito del desarrollo progresivo del derecho internacional. A ese respecto, deben tenerse debidamente en cuenta las resoluciones pertinentes de la Asamblea General, en particular su resolución 46/182, relativa al fortalecimiento de la coordinación de la asistencia humanitaria de emergencia del sistema de las Naciones Unidas. Paradójicamente, sin embargo, el alcance propuesto de los proyectos de artículo es demasiado limitado con respecto a las situaciones que se deberían abordar en el texto. Debería establecerse un conjunto más amplio de situaciones a las que se apliquen los proyectos de artículo y, además, deberían incluirse las actividades de la fase previa a los desastres relacionadas con la reducción de riesgos, la prevención, la preparación y la mitigación.

85. En lo que respecta a los proyectos de artículo 10, 11 y 12, estos no tienen debidamente en cuenta la responsabilidad de proteger, que es uno de los conceptos más innovadores y con un desarrollo más dinámico en la esfera de las relaciones internacionales. Por ello, se debe examinar más detenidamente la pertinencia de ampliar ese concepto, que actualmente solo se aplica en los cuatro casos concretos de

genocidio, crímenes de guerra, depuración étnica y crímenes de lesa humanidad (pero con una importante salvedad: únicamente hasta que los Estados Miembros decidan otra cosa). Habida cuenta de la magnitud de las amenazas y las pérdidas provocadas por los desastres naturales, ha llegado el momento de adoptar nuevas decisiones y encarar el desafío de ampliar el concepto para que incluya las catástrofes naturales.

86. La delegación de Polonia apoya la premisa general, enunciada en el proyecto de artículo 12, de que el ofrecimiento de asistencia no debe interpretarse como una injerencia en los asuntos internos del Estado afectado, siempre que se cumplan las condiciones previstas en el proyecto de artículo 9. Sería mejor abstenerse, sin embargo, de calificarlo de “derecho”, en la medida en que tales ofrecimientos por lo general forman parte de la cooperación internacional. En muchos casos, además, la mera expresión de la solidaridad es tan importante como el ofrecimiento de asistencia. Se debería, por tanto, reformular la disposición a fin de presentar los ofrecimientos de asistencia como un deber positivo. Asimismo, la Comisión debería tratar de alentar a la comunidad internacional a hacer tales ofrecimientos sobre la base de los principios de cooperación y solidaridad internacional.

87. **El Sr. Bernardini** (Italia) dice que ha aumentado la claridad y legibilidad del proyecto de artículos sobre los efectos de los conflictos armados en los tratados, aprobado en segunda lectura y que los comentarios han sido objeto de valiosas precisiones, entre otras cosas mediante la adición, particularmente positiva, de un extenso análisis de la práctica de los Estados. Otra novedad ha sido la inclusión de una definición de conflicto armado muy similar a la adoptada por el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia en la causa *Tadić* y que goza actualmente de amplia aceptación. Los efectos de los conflictos armados internos en los tratados no dependen de ninguna norma específica, sino que se producen más bien cuando el conflicto entraña la imposibilidad sobrevenida de cumplir con las obligaciones convencionales o un cambio fundamental de circunstancias, al igual que ocurre en los conflictos armados internacionales con las relaciones convencionales de un Estado que no es parte en el conflicto. Sería preferible que en el proyecto de artículos se hiciera constar expresamente que, en esta última circunstancia, el conflicto podría ser pertinente solo de manera indirecta. El conflicto

podría ser pertinente en la medida en que diera lugar a las causas de suspensión o terminación de un tratado previstas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

88. Respecto de la lista indicativa de tratados que figura como anexo del proyecto de artículos, el orador dice que existen tratados que son complejos en cuanto a su materia y que pueden contener algunas disposiciones que continúen aplicándose y otras a las que no se aplique la presunción de continuidad. Cabe señalar que los criterios previstos en el proyecto de artículo 11 para determinar la divisibilidad de las disposiciones de un tratado, que se han extraído del artículo 44 de la Convención de Viena, son algo estrictos y, a menudo, pueden entrañar la suspensión o terminación de un tratado en su totalidad, incluidas las disposiciones que, de lo contrario, continuarían aplicándose en razón de sus materia.

89. En lo que toca al tema de la expulsión de extranjeros, la delegación de Italia señala que los Estados distintos del Estado de la nacionalidad podrían estar dispuestos a aceptar al extranjero expulsado. En cualquier caso, teniendo presente que a menudo la expulsión se ve obstaculizada por la dificultad de determinar la nacionalidad del extranjero, sería útil contemplar la posibilidad de imponer a los Estados interesados la obligación de cooperar con el fin de determinar la nacionalidad de la persona objeto de expulsión. Teniendo en cuenta que en la actualidad los proyectos de artículo se encuentran en distintas fases de elaboración, la Comisión podría ofrecer a los lectores, como orientación útil, un panorama general más claro mediante la presentación, en su próximo período de sesiones, de una versión revisada de todos los proyectos de artículo que han sido provisionalmente aprobados.

90. En cuanto a la cuestión planteada en el capítulo III, sección B, del informe de la Comisión en relación con la existencia de una obligación de derecho internacional de proporcionar al extranjero recursos contra la orden de expulsión, los Estados partes en el Protocolo núm. 7 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales o en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos están sujetos a esa obligación con respecto a los extranjeros que residan legalmente en su territorio. Esos Estados, por tanto, disponen de poco margen para recurrir en tales circunstancias al derecho internacional general, y los

recursos al alcance de otros extranjeros probablemente se basen en la legislación nacional y no en una obligación de derecho internacional general.

91. Con respecto a la cuestión planteada en el párrafo 44 del informe de la Comisión en relación con la protección de las personas en casos de desastre, apenas es necesario afirmar que los Estados tienen el deber de cooperar cuando lo solicite un Estado afectado. Además, por lo general los Estados están dispuestos a prestar asistencia en casos de desastre, y resultaría difícil imponerles una obligación específica de cooperar. La cuestión clave que debe examinar la Comisión es de qué forma definir las modalidades de asistencia. El proyecto de artículo 10 trata del deber del Estado afectado de buscar asistencia cuando el desastre supere su capacidad nacional de respuesta, pero podría ser útil proporcionar incentivos para que el Estado afectado recabe ayuda en una fase anterior, tan pronto como resulte adecuado prestar socorro a las víctimas de desastres. La Comisión debería, además, tratar de elaborar propuestas para que la asistencia internacional esté mejor organizada y sea más fácilmente aceptable por los Estados afectados. A tal fin, es esencial que la Comisión que coopere estrechamente con la Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Asuntos Humanitarios.

*Se levanta la sesión a las 13.05 horas.*